

CONTESTO DEMANDA. OFREZCO PRUEBA. CASO FEDERAL.

Señor Juez:

JUICIO: CARDOZO AMANDA CRISTINA C/ FCA SA DE AHORRO PARA
FINES DETERMINADOS Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS -(Expte.
N.º 4524/22)

JOSÉ GARCIA PINTO, abogado, MP. 4193, Libro J – Folio 178, Ley 22.192 Tomo 97 – Folio 525, con domicilio digital 20-23517580-1, en representación de FCA SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS (en adelante FCA), carácter acreditado en autos, a VS digo:

OBJETO.

Siguiendo expresas instrucciones de mi representada, vengo a contestar la demanda incoada por la Sra. Amanda Cristina Cardozo en legal tiempo y forma, solicitando su íntegro rechazo, con costas, en base a las consideraciones fácticas y jurídicas que paso a exponer:

LA DEMANDA INTERPUESTA.

La parte actora demandó a esta sociedad en tanto, a su criterio:

- a. La fijación de las cuotas del plan de ahorro es abusiva.
- b. Se habría producido una variación excesiva del precio de venta.
- c. FCA habría violado el deber de informar.
- d. FCA habría incumplido las resoluciones de la Inspección General de Justicia.

LA DEFENSA DE ESTA SOCIEDAD.

- a. No existió incumplimiento contractual de FCA. Esta sociedad actuó en el marco de lo previsto por la Solicitud de Adhesión, el decreto-ley 142.227/1943 y la normativa dictada por la IGJ (resolución 8/2015, 14/2020 y ccs.).
- b. El valor móvil es informado por la terminal automotriz FCA AUTOMOBILES ARGENTINA S.A. en los términos del art. 1.7 del contrato.
- c. El valor móvil de la unidad ahorrada por el plan de la actora aumentó por debajo de la inflación medida por la IGJ para la adquisición de vehículos.
- d. Esta sociedad no incurrió en ninguna falta de información respecto de la actora.

- e. Las resoluciones dictadas por la IGJ procuran preservar los derechos e intereses de todos los ahorristas involucrados y mantener la ecuación económica financiera del contrato de ahorro previo.

CONTESTO DEMANDA.

NEGATIVAS.

De acuerdo con las expresas y precisas instrucciones de mi mandante, y por imperativo procesal, se niegan todos y cada uno de los hechos y documentos invocados por la demandante que no sean expresamente reconocidos en el curso de este responde.

En particular, se niega categóricamente que:

- La parte actora pueda ser calificada como *“consumidora”*.
- Entre esta parte y la parte actora haya mediado, en general, una *“relación de consumo”* y, en particular, un *“contrato de consumo”*.
- La parte actora haya cumplido con sus obligaciones con normalidad.
- La cuota ascendiera de la manera que describe la parte actora.
- El incremento de la cuota del plan de ahorro *“se encuentre desfasado”*.
- Los ajustes de las cuotas del plan de ahorro no guarden relación con los distintos índices inflacionarios.
- Los valores expuestos en el cuadro de la parte actora sean veraces.
- Exista una suba *“ilegal”* de las cuotas del plan de ahorro.
- Esta sociedad deba comunicar cualquier información que implique una diferencia mayor al 20% en el valor móvil.
- Esta sociedad incumpla con lo dispuesto por las resoluciones 8/15 y 2/19 de la IGJ.
- Esta sociedad deba restituir los importes *“retenidos indebidamente”*.
- Exista una violación al deber de información.
- Exista una conducta disvaliosa por parte de esta sociedad.
- Corresponda la indemnización por daño moral.
- Corresponda la aplicación por daños punitivos.
- Esta sociedad haya tratado de manera abusiva a la parte actora.
- Esta sociedad se apropie de las sumas percibidas por los ahorristas.
- Esta sociedad pretenda un enriquecimiento sin causa *“millonario”* a costa de los ahorristas.
- Esta sociedad haya incurrido en incumplimiento contractual alguno.
- La parte actora haya sufrido daño alguno.
- Esta sociedad deba indemnizar a la actora por rubro alguno.
- Corresponda multar a esta sociedad por daños punitivos.
- En definitiva, la demanda pueda prosperar respecto de esta parte.

Sin perjuicio de las negativas precedentes, esta parte también niega toda la documental acompañada, por cuanto ella no le consta a esta parte. Específicamente se desconocen los siguientes documentos: a) boleta de pago de cuotas, b) informe INDEC.

LA VERDAD ES LA SIGUIENTE

1. El contrato suscripto.

La actora celebró un contrato de ahorro previo con esta sociedad el 19.7.2021, identificado bajo el **grupo 15796 y orden 9**. Dicha contratación fue gestionada por el concesionario Piazza S.A. El modelo ahorrado es un FIAT STRADA ENDURANCE CD 1.4 8V.

Al día 9.1.2024, el grupo tiene un estado de avance de 37 cuotas. En el marco de dicha contratación, se abonaron 30 cuotas en término y 6 fuera de término. Resta el devengamiento de 48 cuotas.

Se destaca que la parte actora adjudicó por sorteo en dos oportunidades, pero jamás cumplió con sus obligaciones contractuales para que le sea adjudicado el vehículo ahorrado.

Específicamente, la primera adjudicación se dio de baja por no ingresar la nota de pedido de unidad. Y, la segunda se dio de baja por no haber cumplido con la carpeta de crédito.

Por otro lado, el plan de ahorro de la parte actora se encuentra beneficiado por una medida cautelar individual desde el 13.12.2023 que reduce las cuotas que debe abonar.

Asimismo, la parte actora posee un estado de deuda por la suma de \$15.818.294,55.

2. Consideraciones respecto de los fundamentos de la demanda. La ausencia de un fundamento jurídico por el cual se deba modificar el cálculo del valor de la cuota.

La parte actora suscribió un plan de ahorro. En el marco de tal contratación ella puede renunciar y recibirá el haber neto al finalizar el grupo en los términos previstos en la solicitud de adhesión.

El plan de ahorro tiene como finalidad recaudar los suficientes fondos para que los ahorristas puedan adquirir un vehículo cero kilómetro determinado a lo largo de la contratación.

Por básico que luzca, se trata de un ahorro para un fin determinado. A pesar de ello, la parte actora cuestiona el valor que debe abonar mensualmente para efectuar ese “ahorro” y eventualmente poder adquirir un vehículo cero kilómetro.

Si ella no quiere abonar ese monto puede dejar de pagar. Renunciar y esperar la liquidación del grupo. No se explica la causa por la cual se pueda hacer una excepción en este caso y que la parte actora pueda eventualmente adquirir un vehículo cero kilómetro a un precio “preferencial” de acuerdo a valores que arbitrariamente la actora pide que se fijen.

La que se pretende enriquecer sin causa es la propia actora quien pretende continuar usufructuando un sistema de ahorro para fines determinados pero aplicando arbitrariamente valores que a ella le parecen conveniente. Esto sin ser una cuestión de primera necesidad por lo que no luce ninguna causa justificada por la que V.S. deba hacer lugar a lo peticionado.

La actora señala que esta sociedad no cumple con la resolución 2/2019 de la IGJ.

El artículo 9 de esa resolución dispone:

“A partir de la vigencia de la presente resolución y hasta el 30 de junio de 2020, las administradoras suspenderán el cobro de los intereses punitivos pactados contractualmente como sanción por los pagos realizados fuera de término, a los suscriptores morosos.”

Por su parte, el artículo 3 disponía:

“El diferimiento será aplicable a los planes de ahorro que se hubieren agrupado hasta el 31 de Agosto de 2019.”

La parte actora suscribió el plan de ahorro el 19 de julio de 2021. Es decir que ya había transcurrido más de un año desde que la resolución había perdido vigencia.

Pero, además, cabe señalar, que luego estuvieron vigentes otras resoluciones cuyos diferimientos siempre fueron ofrecidos a los ahorristas a los cuales le resultaba de aplicación la misma.

Por lo tanto, no se explica el fundamento jurídico por el que la parte actora se agravia respecto del incumplimiento de una norma que no estaba vigente al momento de la suscripción del plan.

3. No existió incumplimiento contractual ni legal alguno en cabeza de esta parte.

FCA de Ahorro tiene por objeto -único y exclusivo- administrar planes de ahorro para fines determinados, se rige por la ley general de sociedades (ley nro. 19.550) y es supervisada constantemente por la IGJ.

En el marco de la contratación de referencia esta parte actuó de acuerdo con lo previsto por la Solicitud de Adhesión, el decreto 142.227/1943 y la normativa dictada por la IGJ

(resolución 8/2015, 14/2020 y ccs.); por lo que no ha existido incumplimiento legal o contractual alguno en cabeza de esta sociedad. A tal punto es así que la parte actora, más allá de exponer su disconformidad con el sistema de ahorro previo contratado, no ha podido señalar, precisa y concretamente, qué cláusula contractual o disposición legal habría sido incumplida por esta sociedad.

La parte actora celebró libremente un contrato de ahorro previo y esta sociedad ajustó su accionar a los términos pactados; por lo que no puede reclamar en contra de las condiciones del mismo luego de años de suscripto, habiendo abonado gran cantidad de cuotas y luego de haber resultado beneficiada con la unidad deseada.

Recuérdese que el objeto del contrato es generar un ahorro previo para un fin determinado, que en el caso se trata de la adquisición de vehículos.

En el marco de dicho contrato de ahorro previo, el suscriptor se obliga a pagar periódicamente, en los términos y condiciones pactados, a la administradora una suma de dinero representativa del valor móvil del bien tipo. Esto con el fin de constituir un fondo común destinado a la adquisición de bienes. Por su parte, la sociedad administradora se compromete a administrar el patrimonio del grupo y a adjudicar los bienes determinados objeto del contrato de acuerdo con lo pactado.

Es decir que todo plan de ahorro previo por grupos cerrados funciona a través del aporte mensual de los ahorristas que a él pertenecen, mediante los cuales la administradora adquiere uno o más vehículos 0km para el sorteo y/o adjudicación de ese mes.

Es que, el ahorrista o adjudicado no paga su vehículo, sino que paga el de los demás miembros del grupo, con excepción del mes en que adjudica, en el que los demás miembros del grupo pagan su unidad.

Es decir, en contraposición a lo indicado por la actora en su demanda, la cuota mensual debe ineludiblemente reflejar los eventuales aumentos del precio en los vehículos 0km - que son informados por la terminal automotriz-. De lo contrario resultaría imposible recaudar los fondos necesarios para realizar las adjudicaciones mensuales que esta sociedad se encuentra obligada a efectuar. Por la misma razón, las cuotas no podrían actualizarse según los ingresos de cada ahorrista o cierto índice de inflación, ya que sería imposible asegurar la adquisición de los vehículos que aumentan su precio conforme el mercado automotriz.

En este sentido, véase que la jurisprudencia señaló *“el aumento de las cuotas, constituye, en sí mismo, una alterativa posible y prevista en la contratación”*. Y, en el mismo fallo, se confirmó la decisión de primera instancia que sostuvo que *“sujetar el monto de las cuotas del plan a un sistema de reajuste ligado al incremento del precio del rodado, resulta una modalidad razonable para garantizar la continuidad de las adjudicaciones y mantener el equilibrio contractual”* (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D; in re *“Nutkiewicz, Juana c/ FCA S.A. de Ahorro Para Fines Determinados y Otro s/ Ordinario”* del 13.12.2022).

Asimismo, la jurisprudencia de la Provincia de Tucumán reciente ha expuesto “*el Valor Móvil, fijado por las terminales automotrices de conformidad con la RG 08/15 de la IGJ, la cual en su art. 32.1. expresamente prevé que “El precio de los bienes que se adjudiquen será equivalente al precio de venta al público sugerido por el fabricante de los mismos...”*. ***Es decir, no es la administradora demandada quien fija el valor del bien (“valor móvil”) a adquirir, sino que quien lo determina es el fabricante del bien (o importador en este caso), lo que surge de la normativa vigente antes señalada...el precio del vehículo no lo fija la Administradora del plan demandada en autos, sino, la Fábrica o Terminal automotriz que no es parte en este proceso, con lo que mal puede sostenerse que la demandada (administradora del plan de ahorro) ha incurrido en una conducta irregular como consecuencia de la variación en el precio de las unidades que adquiere para ser entregadas a los suscriptores de planes de ahorro...Por ello, se insiste, en el contrato de ahorro previo, el valor de la cuota se encuentra determinado necesariamente por el precio de lista o “valor móvil” del bien, sin que pueda ser cambiado dicho parámetro por índices promedios o por variaciones en la cotización de una moneda extranjera, pues, el “valor móvil” hace a la viabilidad y sustentabilidad del sistema de ahorro previo...***” (Cámara en lo Civil y Comercial Común, Sala II; in re “*Fiori Jorge Alejandro c/ FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados y Otro s/ Sumario (Residual)*” del 19.12.2023. (El destacado es propio de esta presentación).

Ello en ocasión de que, esta parte no actúa en relación con un patrimonio propio, sino con respecto al patrimonio de terceros. Tampoco incrementa precios propios ni fija precios, sino que **recauda los fondos de los cocontratantes con los cuales luego adquiere los productos a terceros, que son quienes fijan los precios según su evolución en el mercado.**

En un mismo orden de ideas, se destaca que las cláusulas contractuales que rigen la relación jurídica entre las partes han sido extensamente estudiadas y analizadas por la Inspección General de Justicia, con previa intervención expresa de la *Secretaría de Comercio- Subsecretaría de Comercio Interior- Dirección de Defensa del Consumidor*.

El control y aprobación administrativo de la Inspección General de Justicia -con la previa intervención y sin objeciones de la autoridad gubernamental en materia de defensa de los derechos del consumidor- otorgan a los contratos una indudable **presunción de legitimidad, equidad y corrección**, lo que torna improcedente en sí mismo la demanda deducida en este expediente.

El contrato es harto explicativo y contiene toda la información que un suscriptor debe conocer. Evidentemente los cuestionamientos de la parte actora carecen de todo tipo de sustento legal y fáctico y únicamente han sido esgrimidos con la finalidad de obtener un salvoconducto judicial para dejar de cumplir con las obligaciones a su cargo.

A lo expuesto debe añadirse, de modo decisivo y autosuficiente, que el artículo 1121 del Código Civil y Comercial de la Nación prevé, en su inciso a) que ***“no pueden ser declaradas***

abusivas... las cláusulas relativas a la relación entre el precio y el bien o el servicio procurado”.

Se ha dicho al respecto que *“tratándose de un bien o servicio no podrá cuestionarse como abusivo y dentro del marco jurídico analizado, el precio establecido por el proveedor... El precio constituye un elemento esencial en su configuración como tal. Basta su inclusión para que se cumpla”* (Jorge H. Alterini, *“Código Civil y Comercial Comentado – Tratado Exegético – Tomo V”*, p. 957, Ed. La Ley).

No existe argumento alguno por el cual el valor del bien tipo pueda ser considerado *“abusivo”* o *“excesivo”*.

Esta explicación en sí misma permite concluir que la demanda carece de todo sustento por lo que, a criterio de esta sociedad, la misma debe ser desestimada.

3. El valor móvil de la unidad aumentó por debajo de la inflación medida por el INDEC para la adquisición de vehículos.

La parte actora alegó que se habrían producido aumentos arbitrarios en el marco de su contratación de ahorro previo.

Al respecto se destaca que los parámetros contemplados por la accionante, tales como sus ingresos, el dólar, la inflación o la tasa activa del BCRA, son ajenos al cálculo realizado en el marco de una contratación de ahorro previo y, por lo tanto, improcedentes para su consideración.

A todo evento, se menciona que, en el **anexo II** de la prueba documental, esta sociedad acompaña una planilla de la cual puede observarse cuál ha sido el precio de lista del vehículo desde diciembre de 2022 hasta la actualidad. Por su parte pueden descargarse del siguiente enlace <https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-5-31> los *“Índices y variaciones porcentuales mensuales e interanuales según principales aperturas de la canasta. Diciembre de 2016-junio de 2024”*. Este siendo el único índice que podría considerarse a los efectos de indicar el eventual aumento excesivo del valor móvil.

Nótese que, si se tienen en cuenta los **índices de apertura para la adquisición de vehículos en la Región del Noroeste**, desde diciembre del 2021 y junio del 2024 (último mes publicado por el INDEC en índice proveniente del link señalado), el aumento ha sido de 9,85 veces. Por su parte, el aumento del valor móvil entre esas mismas fechas fue de 9,40 veces.

Es decir que el aumento que tuvo la unidad desde el año de su entrega a la actualidad fue inferior a la inflación medida por el Estado Nacional en el mismo periodo para la *“adquisición de vehículos”*.

A todo evento, se destaca que esta sociedad no ha hecho más que sujetarse estrictamente a las normas y disposiciones del contrato aplicables.

Más allá de lo expuesto, corresponde señalar que, la parte actora con sus reclamos no tiene en cuenta la onerosidad que representa para esta sociedad el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Se olvida que esta sociedad debe recaudar mensualmente los fondos necesarios para que los grupos de ahorristas puedan adquirir vehículos. **Si sube el precio de los vehículos, naturalmente, esta sociedad -quien administra el grupo- necesitará recaudar más fondos para que los restantes ahorristas puedan adquirir vehículos.**

Esta sociedad, lejos de beneficiarse por los efectos de la inflación, le genera también grandes inconvenientes. Es que las obligaciones asumidas con cientos de miles de personas a lo largo del país le imponen la obligación de recaudar mayores fondos para poder adjudicar los vehículos en cada uno de los grupos.

Ese fenómeno económico profundamente dañino para esta sociedad perjudica a todos los actores y no solo a los asalariados. A esta sociedad también se le incrementan sus costos en pesos y sus ingresos se explican, únicamente, en los aranceles que percibe por ocuparse de la administración de los planes.

4. Sobre el supuesto incumplimiento con un deber de información.

La parte actora alegó en su demanda que *“no surge de forma clara y simple del contrato de adhesión al plan de ahorro, la cual no establece un mecanismo de notificación de la actualización de cuotas...”*

En primer lugar, se recuerda que, esta sociedad actualiza las cuotas de los planes de ahorro que administra a partir del valor móvil informado por la fabricante. Es decir, no considera (ni sería posible en virtud de la financiación de la totalidad del grupo integrado por la actora) otros criterios como los indicados en la demanda.

En cuanto a la notificación de la actualización de las cuotas, esta se realiza al momento de enviar el cupón de pago al adherente para su abono.

Se destaca que esta sociedad contractualmente no se encuentra obligada a avisar sobre cada actualización que realice la sociedad fabricante. Sino que, con el simple hecho de enviar en tiempo y forma los cupones de pago para que los ahorristas puedan abonar sus cuotas ya se encuentra cumplido el deber de información establecido dentro de la solicitud de adhesión suscripta por la parte actora.

A todo evento, cabe mencionar que esta sociedad cuenta con canales de comunicación, los cuales surgen de la página <http://www.fiatplan.com.ar/>. Específicamente, a través del siguiente link <https://crmfcalatam.force.com/selfservicepda/s/fiat> esta sociedad

podría haberle explicado el funcionamiento del plan de ahorro. Ello no ocurrió en el caso de autos.

Por los motivos expuestos, no corresponde considerar que esta sociedad ha incurrido en incumplimiento alguno.

5. Los diferimientos previstos en las resoluciones 2/2019, 14/2020, 38/2020, 51/2020, 5/2021, 11/2021, 20/2021, 3/2022, 12/2022 y 5/2023 dictadas por la Inspección General de Justicia.

Se destaca que, esta sociedad ha ofrecido durante años los diferimientos contemplados en las resoluciones generales mencionadas, a través de las cuales la IGJ, como organismo de control del accionar de esta sociedad, dispuso que las entidades administradoras de ahorro bajo modalidad de grupos cerrados, debían ofrecer a los suscriptores de planes de ahorro, cuyo agrupamiento se haya producido hasta la fecha de la vigencia de la resolución, la posibilidad de diferir el pago de las cuotas que se devenguen en el marco de aquéllos, con sujeción a las siguientes reglas:

- a. El diferimiento podía aplicarse hasta 12 cuotas consecutivas por vencer al momento de ejercerse la opción.
- b. De las cuotas sobre las que se ejerza la opción, se diferían los siguientes porcentajes:
 - Sobre las últimas 4 cuotas, o menor cantidad, un 10%;
 - Sobre las 4 anteriores a estas, o menor cantidad, un 20%;
 - Sobre las 4 primeras, o menor cantidad, un 30%.

En cuanto a los suscriptores comprendidos, podían optar por el diferimiento los suscriptores con contratos vigentes, tanto si se encontraban en período de ahorro, como si habían recibido el vehículo adjudicado. Asimismo, podían acceder al diferimiento aquellos ahorristas cuyos contratos a la fecha de vigencia de la resolución general 5/2021 y desde el 1.4.2018, se encontraren extinguidos por renuncia, rescisión o resolución, los cuales deberán al momento de ser adjudicados cancelar el importe de las cuotas en mora.

Ello con el objetivo de permitirle abonar las cuotas reducidamente y a su vez no desproteger el derecho del resto de los ahorristas de su grupo de ahorro previo que dependen de sus aportes para obtener los vehículos deseados.

Véase que, la jurisprudencia ha establecido que la Inspección General de Justicia (organismo a nivel nacional especializado en la materia) ha armonizado los derechos e intereses de la totalidad de los ahorristas involucrados en el sistema, procurando preservar la financiación de este último (solo a modo meramente ejemplificativo: **Superior Tribunal de Justicia de Río Negro**, in re “*Blanes Pereyra, María Eugenia y otros c/ Volkswagen SA de Ahorro para Fines Determinados s/ Acciones individuales homogéneas*”, del 28.6.2021; **Cámara Segunda de Apelaciones en los Civil y Comercial de**

Entre Ríos, Sala III, in re “*Centro de Orientación, Defensa y Educación del Consumidor (CODEC) C/ Chevrolet SA de Ahorro para Fines Determinados y otros s/ Medida cautelar prohibición de innovar*”, del 16.4.2021; **Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca, Sala II**, in re “*Bett Esteban Agustín c/ Chevrolet SA de Ahorro para Fines Determinados s/ Daños y perj. Incump. Contractual y medidas cautelares (Exc. Estado)*”, del 9.11.2020; **Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Morón**, in re “*López Christian Nahuel C/ Fiat Auto S.A. de Ahorro para Fines Determinados y otros s/ Medidas cautelares (Traba/Levantamiento) Inc. Art. 250 CPCC*”, del 5.8.2021; **Cámara de Apelaciones en lo Civil de Trelew, Sala A**, in re “*Sturz Norma Beatriz c/ FCA SA de Ahorro para Fines Determinados y otro s/ Sumario*”, del 9.11.2020; **Cámara de Apelaciones en lo Civil de Trelew, Sala A**, in re “*Guido Stella Maris c/ Fiorasi SA y otros s/ Cumplimiento de Contrato*”, del 9.11.2020; **Cámara de Apelaciones Civil de Comodoro Rivadavia**, in re “*Roldán, Juan Matías c/ Peugeot Autoplan y Círculo de Inversores de Ahorro para Fines Determinados (PSA Group) s/ Medida cautelar (actuaciones art. 252 CPCCCH)*”, del 8.11.2021; **Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de Río Negro**, in re “*Martínez Garrido Luis Alexis C/ FCA SA de A. para F.D. s/ Medida cautelar*”, del 7.3.2022; **Cámara de Apelaciones Civil de Comodoro Rivadavia**, in re “*Medina, Anahí Helena Irupe s/ FCA SA de Ahorro para Fines Determinados y otros s/ Medida cautelar (actuaciones art. 252 CPCCCH)*”, del 29.11.2021; **Cámara en lo Civil y Comercial de Jujuy, Sala III, Vocalía 9**, in re “*Lozano Calamaro Pedro Sebastián c/ FCA SA de Ahorro para Fines Determinados s/ Cautelar: prohibición de innovar*”, del 10.11.2020; **Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 18va. Nominación de Rosario**, in re “*Gurdulich, Lucas Cristian C/ FCA SA Ahorro para Fines Determinados y otros s/ Medida cautelar innovativa*”, del 24.2.2021).

Sin perjuicio de ello, y de su existencia, la parte actora decidió, en claro desprecio por los derechos del resto de los ahorristas de su plan de ahorro, desestimar la opción indicada y solicitar la aplicación de una medida cautelar y la readecuación de su deuda a su mera conveniencia.

6. La supuesta imposibilidad de continuar abonando las cuotas pactadas.

La parte actora argumentó que esta sociedad se encuentra “*obligándole al pago de una cuota completamente desvirtuada en relación a la que se abonada inicialmente, lo que le genero una situación de angustia aflicción, malestar y sufrimiento, con motivo de los esfuerzos que debo hacer mensualmente para cumplir con el pago de la misma.*”

A todo evento, se destaca que la parte actora no registra deudas ante el sistema financiero según el Banco Central de la República Argentina. Se acompaña como prueba documental la información que esta sociedad ha compulsado ingresando el CUIT de la parte actora en el sitio web de dicha entidad.

De allí se advierte que en el último mes informado la parte actora ha registrado obligaciones financieras por un total de **\$877.000 y no se encuentra en mora.** Por lo

tanto, resulta llamativo que una persona con ese nivel de crédito alegue que se encuentra imposibilitada de cumplir con el pago de las cuotas.

Ante la información compulsada por esta sociedad y la orfandad probatoria de la actora, no cabe más que desestimar sin más cuanto invocó sobre el particular. **Ello, además de destacar que la supuesta imposibilidad de la parte actora de afrontar el pago de las cuotas no resulta condición suficiente para la readecuación de la misma.**

Se destaca que, en un caso de similares pretensiones, se resolvió al respecto que *“en este sentido, la sola consideración del desajuste del valor de la cuota del plan de ahorro en relación a los ingresos del demandante no constituye -por sí sola- la fundamentación necesaria a los fines de dejar sin efecto cautelarmente la aplicación de las cláusulas de un contrato de plan de ahorro, el cual, como se dijo, dispone no solo de la intervención de diversos sujetos particulares en dicho sistema, sino también a la autoridad de aplicación en la materia, tanto en la reglamentación del mismo como en su control y autorización”* (Cámara de apelaciones de Trelew, “Sturz, Norma Beatriz c/ FCA S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS y otro s/ sumario”; del 9.11.20).

Es que, si se llevara al extremo el razonamiento propuesto por la parte actora, la persona que se encuentra suscripta a un tiempo compartido para vacacionar en un destino exclusivo tendría derecho a que se readecue el valor de su cuota si el peso se devalúa excesivamente a su criterio. Un vehículo no resulta un bien indisponible para una persona; a tal punto ello es así que si la actora quebrara el vehículo le sería desapoderado. Por lo que si la parte actora no podía pagar las cuotas del mismo debió desprenderse del bien y no reclamar judicialmente la readecuación del contrato.

Esta parte, en tanto acreedora prendaria, se encuentra legitimada para brindar su conformidad a un tercero que decida hacerse cargo de la deuda y quedarse con el vehículo. De hecho, nada le impedía a la parte actora tomar un mutuo, saldar la deuda que tiene con esta sociedad y luego cancelar el crédito según los términos y condiciones que pacte con el mutante. Es decir, la actora contaba con múltiples alternativas frente a la situación de hecho por ella planteada.

7. Jurisprudencia que confirma lo expuesto.

La jurisprudencia ha destacado que la modalidad más difundida de planes de ahorro involucra una operatoria que comprende Grupos de Ahorro compuestos por 168 ahorristas domiciliados aleatoriamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en cada una de las provincias de la República Argentina. En consecuencia y en tanto el sistema de ahorro se encuentra inspirado en la mutualidad, es decir en la autofinanciación de los ahorristas, la decisión que se adopte respecto de uno de estos, indefectiblemente, repercutirá en los restantes 167.

En ese sentido, la jurisprudencia ha indicado que *“los grupos de ahorro no se circunscriben a residentes de una determinada provincia, sino que se conforman con ahorristas de distintos puntos del país; de tal modo, teniendo en cuenta las especiales relaciones que se dan entre los adherentes que conforman cada grupo de ahorro –según señalábamos supra- y el posible impacto de la decisión en la conformación del fondo de adjudicación de cada conjunto de ahorristas, podemos afirmar que la cuestión relativa a la validez o nulidad de las cláusulas del contrato de adhesión atinentes a la determinación del valor de las cuotas mensuales, necesariamente trasciende la órbita provincial y se proyecta a aquellos adherentes de planes que no residen en esta jurisdicción”* y a ello ha agregado que *“piénsese que, de admitirse pronunciamientos de la justicia ordinaria circunscriptos al área de su competencia local (“residentes de la Provincia de Córdoba”), que alterasen directamente el funcionamiento de un sistema a escala nacional, quebrando la igualdad entre los adherentes de todo el país y violando la ecuación económica de los planes de ahorro en el territorio nacional”* (**Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, Sala VII**, in re *“Acosta, Nora Inés y otros c/ Volkswagen Argentina SA y otro - Cuerpo de apelación de Volkswagen SA de Ahorro para Fines Determinados”*, del 11.12.2020).

En atención a ello, dicho sistema de ahorro se encuentra regulado por normas federales y autoridades nacionales, como la Inspección General de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, las cuales tienen a su cargo el contralor permanente de aquél.

Frente a ese panorama, en derecho, resulta improcedente que desde determinada provincia se dicte una resolución que afecte a otros 167 ahorristas domiciliados en la Ciudad Autónoma y el resto de las provincias, en tanto se afectaría la ecuación económica-financiera del contrato y se frustraría el sistema de ahorro (**Superior Tribunal de Justicia de Río Negro**, in re *“Blanes Pereyra, María Eugenia y otros c/ Volkswagen SA de Ahorro para Fines Determinados s/ Acciones individuales homogéneas”*, del 28.6.2021; **Superior Tribunal de Justicia de Río Negro**, in re *“Velásquez, Silvio Fernández c/ Volkswagen SA de Ahorro para Fines Determinados s/Amparo s/ Apelación”*, del 23.12.2019; **Superior Tribunal de Justicia de Río Negro**, in re *“Díaz, Federico Gustavo y otro s/ Amparo colectivo (copias previstas por el art. 250 cpcc) s/ Apelación”*, del 12.12.2018; **Superior Tribunal de Justicia de Río Negro**, in re *“Mobili, Ernesto y otros s/ Amparo colectivo s/ Apelación”*, del 19.11.2019; **Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Entre Ríos, Sala III**, in re *“Centro de Orientación, Defensa y Educación del Consumidor (CODEC) C/ Chevrolet SA de Ahorro para Fines Determinados y otros s/ Medida cautelar prohibición de innovar”*, del 16.4.2021; **Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas de La Rioja, Secretaría A**, in re *“Cortez Rodríguez Gabriel Sebastián y otros c/ FCA SA de Ahorro Para Fines Determinados s/ Acción de amparo”*, del 26.10.2020; **Juzgado de Primera instancia en lo Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 1 de Cipolletti**, in re *“Agatappa Marcelo Fabián y otros c/ Chevrolet SA de Ahorro para Fines Determinados y otros s/ Amparo colectivo”*, del 15.11.2019; **Juzgado Laboral N° 2 de San Luis**, in re *“Programa Defensa del Consumidor c/ Chevrolet y otros s/ Amparo*

documental N° 1972”, del 18.09.2019. En el mismo sentido aunque en relación con la competencia judicial: Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 8va. Nominación de Santa Fe, in re “Serrano, María Laura c/ Volkswagen SA de Ahorro para Fines Determinados y otros s/ Demanda de derecho de consumo”; Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 de Misiones, in re “Benítez, Alejandra Mariela c/ Volkswagen SA de Ahorro para Fines Determinados y otros s/ Sumarísimo”, del 19.12.2019).

Tal como se explicó, el valor de las cuotas de los planes de ahorro previo se establece sobre un determinado porcentaje del precio de lista que mensualmente informa el fabricante o importador del vehículo modelo de ahorro a la administradora del sistema.

En ese mecanismo descansa la ecuación económico-financiera del sistema de ahorro y ello ha sido lo rigurosamente cumplido por esta sociedad, en ocasión de que el equilibrio de las prestaciones reside en la adecuación entre el valor de la cuota del plan de ahorro y el porcentaje correspondiente al precio del vehículo modelo de ahorro.

En este sentido se resolvió en *“Chávez Pedro Celestino c/ Fiat Auto S.A. de Ahorro para Fines Determinados s/ Proceso Abreviado”, CXP 14577/2* el 19.12.2022 en los siguientes términos *“Es así que por su parte la empresa administradora de planes de ahorro sujeta el monto de la cuota al valor vigente del producto que se pretende adquirir, a efectos de mantener el equilibrio entre los suscriptores manteniendo el equilibrio de sus prestaciones.- Tengamos presente que el actor es suscriptor adjudicado es decir ya le fue entregado el bien.- Esta exigencia de la administradora tiende a asegurar el autofinanciamiento del grupo de suscriptores e impedir quebrar el principio de mutualidad en perjuicio de los restantes integrantes del grupo y consecuente frustración del propósito del plan de ahorro.- Es que el objeto de estos planes se logra cuando existe un equilibrio permanente entre los ingresos al fondo y los egresos del fondo.- Un plan de ahorro no es un sistema de financiamiento sino un sistema de ahorro de los suscriptores donde aportan para que al finalizar todo el grupo de suscriptores pueda adquirir la propiedad de bienes semejantes.- Y un cambio en las prestaciones readecuándolas conforme lo solicita el actor, cotejando los derechos y las obligaciones de ambas partes y los riesgos contractuales que cada una asumió, alteraría las bases del negocio jurídico, su objeto, ocasionando por el contrario un desequilibrio económico en el grupo integrado por suscriptores ahorristas y suscriptores adjudicados”*. En el mismo sentido se expidieron en los casos *“Reinoso Diego c/ FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados y Otro s/ Ordinario”* Expte. N° 172129 el 20.12.2022 y en *“Fredes, Matías Leonel c/ Fiat Plan y Otros s/ Demanda de Derecho de Consumo”* CUIJ 21-02951388-8 en noviembre del 2022.

Asimismo, se ha precisado que *“no escapa que el incremento de las cuotas, confrontado con las posibilidades económicas actuales del accionante, pueda tener aptitud para causarle un daño derivado del eventual incumplimiento de sus obligaciones. Empero, no configurada la verosimilitud necesaria para acoger la pretensión, esa circunstancia no resulta suficiente para el amparo judicial cautelar; máxime cuando su dictada no sólo*

genera una desigualdad con los derechos del resto de los suscriptores sin que puede causarle perjuicios al desfinanciar el sistema que los vincula” (Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 20, Secretaría N° 39, in re “Mojoli, Mariano c/ FCA SA de Ahorro Para Fines Determinados y otro s/ Sumarísimo”, del 30.12.2020). En el mismo sentido se resolvió en Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 11 de Mar del Plata, in re “Corradi Sarti, Julio Ezequiel c/ Ford Argentina SCA y otros s/ Medidas cautelares (traba/levantamiento)”, del 22.4.2021.

En el mismo sentido, en un caso de jurisprudencia reciente se sostuvo ***“en este tipo de contratos, se conviene que el reajuste de las cuotas de integración se encuentra en directa relación con el número de suscriptores y valor de la unidad móvil de los bienes cuya adquisición se pretende, para posibilitar de esta manera la continuidad de las adjudicaciones a los demás ahorristas, y el rescate de los rescindidos. Así, dichos bienes se adquieren al contado y por un precio fijo, determinado en el momento de la compra en función de las listas de precios de las terminales de automotrices. En virtud de ello, los saldos debidos por los ya adjudicados no se vinculan con el precio de los vehículos pagados y adjudicados, sino con los aportes que se deben hacer al grupo para proseguir con las compras al contado, con el fin que los demás suscriptores puedan ver cumplidas sus expectativas (“Aquino Mendoza, Angelica C/ Fca S.A. De Ahorro Para Fines Determinados S/Medida Precautoria” Expediente N° 6736/2021, del 31/5/2021)...Refuerza lo dicho que la “cuota”, no sólo se integra con el valor móvil del modelo de ahorro y con la cantidad de cuotas a abonar, sino también con cargos administrativos y seguros sobre el rodado... En fin, retrotraer el valor de la cuota al porcentaje que pretende la reclamante o fijarlo en proporción a los índices que indica en la demanda, impone una interpretación de relaciones contractuales que es ajena al entramado contractual que dio origen a este reclamo”*** (Cámara Comercial, Sala F, in re “Aquino Mendoza, Angélica c/ FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados s/ Sumarísimo”, del 22.11.2023. El destacado es propio de esta presentación).

Más allá de los casos específicamente señalados, a modo meramente ilustrativo, considérese lo resulto en los siguientes precedentes: **Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Sala Civil y Comercial**, in re “Centro de Orientación, Defensa y Educación del Consumidor (CODEC) c/ Chevrolet SA de Ahorro Para Fines Determinados y otros s/ Medida cautelar prohibición de innovar (cuadernillo del 247 CPCyC)”, del 18.11.2021; **Superior Tribunal de Justicia de Corrientes**, in re “Incidente de medida cautelar en autos: Menises Carlos Alberto c/ Toyota Plan Argentina SA de Ahorro para Fines Determinados s/ Sumarísimo”, del 4.3.2021, al que remite el precedente de la **Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Corrientes, Sala IV**, in re “Legajo de apelación en autos: incidente de medida cautelar de Aranda José Dante, González Mauricio Ignacio, Centurión Lucas Sebastián, Conte María Lidia y Altube Guadalupe c/ Volkswagen SA de Ahorro para Fines Determinados s/ Amparo entre particulares”, del 15.9.2021; **Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C**, in re “Callone Daiana Magali c/ FCA SA de Ahorro para Fines Determinados y otro s/ Medida precautoria”, del 30.9.2019; **Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D**, in re “Izbizky Gustavo Hernán c/ Fiat Auto SA s/

Sumarísimo”, del 21.4.2010; **Cámara de Apelaciones Civil de Comodoro Rivadavia, Sala B**, in re “*Santarcangelo, Pablo Rubén c/ FCA SA de Ahorro para Fines Determinados s/ Medida cautelar (actuaciones art. 252 CPCCCH)*”, del 2.9.2021; **Cámara de Apelaciones Civil de Comodoro Rivadavia**, in re “*Medina, Anahí Helena Irupe s/ FCA SA de Ahorro para Fines Determinados y otros s/ Medida cautelar (actuaciones art. 252 CPCCCH)*”, del 29.11.2021; **Cámara de apelaciones de Trelew**, in re “*Sturz, Norma Beatriz c/ FCA SA de Ahorro para Fines Determinados y otro s/ Sumario*”, del 9.11.2020; **Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas de La Rioja, Secretaría A**, in re “*Cortez Rodríguez Gabriel Sebastián y otros c/ FCA SA de Ahorro Para Fines Determinados s/ Acción de amparo*”, del 26.10.2020; **Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 15ta. Nominación de la provincia de Santa Fe**, in re “*Muller, Cristian Gonzalo c/ FCA SA de Ahorro para Fines Determinados y otros s/ Demanda de derecho de consumo*”.

La doctrina es coincidente en el punto “*el capital aportado por los suscriptores se actualiza mensualmente (y por tanto las obligaciones de la administradora), en forma tal, que no pierde valor adquisitivo, en especial cuando dicha actualización queda ligada a la variación del precio del bien o del servicio que el suscriptor desea adquirir. De la misma manera, y en base a los mismos índices, se actualizan las obligaciones del suscriptor (y los créditos de la administradora), de modo que el equilibrio entre créditos y deudas de la sociedad frente al conjunto de suscriptores nunca se quiebre...las relaciones antes descriptas constituyen una ecuación de hierro, que siempre habrá que respetar para asegurar la salud financiera del sistema*” (**Aguilar, Fernando, Sistemas de ahorro previo por grupos cerrados**, Astrea, Buenos Aires, 1988, pp. 31 y 32).

Por último, se destaca un caso de similares pretensiones en el cual se rechazó la demanda y se consideró que “*Entiendo que así interpretado este tópico, nos tiene que servir a los operadores jurídicos para calibrar hasta qué punto es necesario involucrarse en los contratos o por el contrario debemos respetar la autonomía de la libertad, así entendido es fácil comprender que no toda frustración contractual amerita una intromisión jurisdiccional en una negociación celebrada entre particulares y que solo cuando se trate de situaciones extremas que pongan en peligro la dignidad humana amenazada por abusos inaceptables que lesionan la moral y las buenas costumbres, recién podría justificarse la adopción de determinaciones tutelares, y concretamente, la privación de seguir usufructuando un automóvil nuevo, hasta donde alcanzo a comprender, no afecta necesidades tan esenciales como para adoptar soluciones extremadamente heroicas como las demandadas por la actora*” (**Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Primera Nominación de la ciudad de Reconquista**, in re “*AGUIRRE JAVIER HERNAN C/ FIAT AUTO S.A. DE AHORRO P/ FINES DET. Y OTROS S/ INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL*”, CUIJ 21-25024283-9, del 8.6.2021).

NO SE ENCUENTRA ACREDITADA LA CALIDAD DE CONSUMIDORA DE LA ACTORA.

Más allá de que se han contestado todos y cada uno de los planteos de la parte actora, a criterio de esta sociedad no corresponde aplicar en autos el régimen protectorio

previsto en la ley 24.240.

La parte actora sustentó -esencialmente- sus pretensiones en su supuesto carácter de “consumidora” en virtud de su condición de suscriptora de plan de ahorro previo. No obstante, no se subsumieron los extremos fácticos consagrados en los arts. 1, 2 y 3 de la ley 24.240 en los hechos subyacentes al presente proceso.

Contrariamente a lo alegado por la parte actora, el contrato de ahorro previo no es necesariamente un contrato de consumo y el hecho de ser “suscriptora” de un plan de ahorro no convierte “automáticamente” a la parte actora en “consumidora” pues para ello deben darse todos los requisitos enumerados en los arts. 1, 2 y 3 de la ley 24.240 y ello debe acreditarse fehacientemente. Nótese que pueden ser suscriptores de planes de ahorro personas jurídicas, personas físicas que a través de este pretenda adquirir el bien tipo para destinarlo a una unidad productiva (ej. taxi, flete, etc.) y otras múltiples variantes que no encuadrarían al suscriptor como “consumidor”.

En autos, la parte actora dio por hecho que revestía el carácter de consumidora y que, por lo tanto, correspondía la aplicación lisa y llana de tal plexo normativo. Es decir, la parte actora, con absoluto dogmatismo, basó toda su demanda actuando por vía presuncional que se trata de una relación de consumo.

No obstante, nuestro ordenamiento jurídico carece de una presunción respecto del carácter de “consumidor”, por lo que para proceder a esta calificación y tornar aplicable, en consecuencia, la ley 24.240 es necesario alegar y probar, con suficiencia, los distintos extremos fácticos que permitan tener por configurados los requerimientos plasmados por el régimen legal.

En tal sentido la jurisprudencia ha resuelto que *“el ‘consumo final’ alude a una transacción que se da fuera del marco de la actividad profesional de la persona, ya que no va a involucrar el bien o servicio adquirido en otra actividad con fines de lucro, o en otro proceso productivo...”* (CN.Com., Sala B in re “Milgrón Nicolás Martín c/ General Motors de Argentina SRL s/ ordinario” del 30.10.2015; el subrayado es propio de esta presentación).

En cuanto a la necesaria acreditación de la relación de consumo la doctrina ha señalado que *“es fundamental acreditar la existencia de una relación de consumo, cuya presencia es condición para la aplicación del régimen tuitivo consumidor. Existirá cuando estemos en presencia de un consumidor en los términos del art. 1º y un proveedor en el sentido y alcance del art. 2º, en ambos casos de la Ley de Defensa del Consumidor 24.240, y en función de los conceptos que aporta el CCCN”* (TAMBUSSI, Carlos E. “Ley de Defensa del Consumidor. Comentada. Anotada. Concordada”. 2a. ed., Buenos Aires: Hammurabi, p. 69; en un mismo sentido ARIAS CAU, Esteban; BAROCELLI Sergio, “Necesaria acreditación de una relación de consumo para los daños punitivos”, 5.9.2014, publicado en La Ley, Cita online AR/DOC/2443/2014 y CHAMATROPULOS, Demetrio Alejandro, “Estatuto del Consumidor”, Tomo II, 1era. Edición, La Ley, Thomson Reuters, 2016, Buenos Aires).

La jurisprudencia también ha reconocido la necesidad de acreditar los extremos para tener por configurada una relación de consumo en los siguientes términos *“no se encuentra probado que el vehículo hubiese sido adquirido con un destino final o familiar de consumo”* por lo que *“en ese marco, no cabría calificar a la actora como consumidora a los efectos de la tutela de la ley consumeril”* (CN.Com., Sala E, in re *“Cejas, Gabriela Alejandra c/ FCA Automobiles Argentina SA s/ Sumarísimo”*, del 29.12.2021, el destacado es propio de esta presentación; en un mismo sentido **Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Matanza** *“Mereles, Eva Natalia c. HSBC Bank Argentina S.A. s/ daños y perjuicios”*, 19.9.2019, publicado en La Ley Online, cita online: AR/JUR/28118/2019).

La parte actora, por básico que luzca, no ha siquiera mencionado estas circunstancias, las cuales son presupuestos mínimos e indispensables para la aplicación de las normas de defensa del consumidor de las cuales se intenta valer. Dicha circunstancia -es decir la falta de prueba ofrecida por la parte actora para acreditar la calidad invocada- sella la suerte adversa de su planteo orientado a ser reconocida como tal, por lo que se solicita se tenga en cuenta -ante todo- dicha circunstancia al momento de resolver el litigio.

INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD DE ESTA PARTE. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA.

a) Inexistencia de un incumplimiento objetivo.

En el caso, esta sociedad no ha incurrido en incumplimiento contractual alguno, tampoco ha incurrido en conducta antijurídica alguna. Contrariamente a ello, esta sociedad ha ajustado su accionar al contrato y ha adecuado su conducta a las resoluciones dictadas por la IGJ en la materia.

b) Inexistencia de un daño imputable a esta parte.

La parte actora no ha podido explicar siquiera superficialmente cuál sería el daño que habría padecido. Mucho menos lo acreditó u ofreció hacerlo.

La demanda evidencia que la parte actora se encuentra en disconformidad con el funcionamiento del sistema de ahorro previo que ella misma decidió contratar y que le permitirá – si cumple con los requisitos solicitados -adquirir un vehículo 0km, pero de modo alguno expone cuáles serían los daños padecidos a partir del mismo.

c) Inexistencia de un factor de atribución.

Ciertamente que en el caso no se presenta ningún factor de atribución objetivo ni subjetivo que permita atribuir responsabilidad a esta parte, en los términos de los artículos 1722, 1723 y 1724 del Código Civil y Comercial de la Nación. Tampoco se le puede imputar un accionar culposo a esta parte. Mucho menos uno doloso. Es decir, no hay un factor de atribución que pueda ser aplicado al *sub lite*.

d) **Inexistencia de relación causal entre el daño invocado y el accionar de esta parte.**

El artículo 1726 del Código Civil y Comercial de la Nación establece expresamente que *“son reparable las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño. Excepto disposición en legal en contrario, se indemnizan las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles”*.

Como se dijo, la parte actora no pudo -en absoluto- explicar cuáles serían los daños padecidos, pero mucho menos expuso cuál sería el nexo de causalidad entre los mismos y el comportamiento de esta sociedad.

Si la parte actora sufrió algún daño -lo que se niega- el mismo no fue consecuencia de esta sociedad, sino del propio obrar negligente de la parte actora o de un tercero por el cual no debe responder.

LAS IMPROCEDENTES PRETENSIONES DE LA PARTE ACTORA.

La parte actora pretende:

1) Daño directo.

El art. 40 bis de la ley 24.240 establece *“Daño directo. El daño directo es todo perjuicio o menoscabo al derecho del usuario o consumidor, susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionado de manera inmediata sobre sus bienes o sobre su persona, como consecuencia de la acción u omisión del proveedor de bienes o del prestador de servicios. Los organismos de aplicación, mediante actos administrativos, fijarán las indemnizaciones para reparar los daños materiales sufridos por el consumidor en los bienes objeto de la relación de consumo...”* (el subrayado es propio de esta presentación).

Del propio texto de la norma surge que los organismos competentes para determinar el daño directo son los llamados *“organismos de aplicación”* y no el Poder Judicial de la Provincia de Tucumán.

Es clara la norma al hablar de *“actos administrativos”*. En todo caso, el actor debió reclamar la aplicación de este artículo en sede administrativa.

Por tal motivo, V.S. no puede reconocer una indemnización por *“daño directo”* toda vez que ello implicaría violar la división de poderes toda vez que la aplicación del art. 40 bis está reservada para el Poder Ejecutivo.

2) Daño moral.

La parte actora solicitó el reconocimiento del rubro en cuestión, por \$2.500.000 alegando que *“trato abusivo de parte de la demandada, quien sin tener en cuenta la realidad socio económica Argentina, ni los índices inflacionarios informados por los*

organismos oficiales como el INDEC., aumento en forma desmedida la alícuota del plan de ahorro que suscribió oportunamente, obligándole al pago de una cuota completamente desvirtuada en relación a la que se abonada inicialmente, lo que le genero una situación de angustia aflicción, malestar y sufrimiento, con motivo de los esfuerzos que debo hacer mensualmente para cumplir con el pago de la misma.”.

Lo cierto es que, la parte actora no ha alegado razonada y particularmente el supuesto daño, que se niega, menos lo ha probado. Por el contrario, le dispense al daño moral un tratamiento residual, como mera consecuencia accesoria, de sus demás planteos.

Es decir, basa el daño moral reclamado en un supuesto desequilibrio económico que le habría causado problemas, sin acreditar ninguna de dichas situaciones. Por el contrario, lo que surge tanto de la prueba por ella acompañada, como de aquella agregada por esta parte y el relato de esta presentación es que, la parte actora no se encuentra en mora y/o exista prueba suficiente que acredite dicha imposibilidad. Si no que, la parte actora ha abonado sin problemas gran cantidad de cuotas del plan de ahorro.

Se agrega que, en torno a la temática provista por el denominado “*daño moral*”, la jurisprudencia ha resuelto que “*nos encontramos frente a una relación contractual que, como normalmente sucede, lleva implícita la eventualidad de que uno de los contratantes incumpla lo convenido, extremo prima facie insuficiente para generar un daño moral resarcible. Porque para que un incumplimiento contractual conlleve un daño de esta índole es preciso que la afectación íntima trascienda lo que puedan ser alternativas o incertidumbres propias del mundo de los negocios, y su existencia debe ser apreciada con criterio restrictivo (conf. CNCiv, Sala I, 9.12.98, “Pigni, Daniel F. c/ Instituto Fasel)” (CN. Com. Sala D, in re “Valentinuzzi Roberto Mario c/ Centro Milano SA s/ Sumarísimo” del 18.8.2016).*

En igual sentido, esa misma Sala con apoyo en frondosa doctrina y jurisprudencia ha considerado que “*dentro de la órbita de la responsabilidad contractual prima un criterio restrictivo en materia de reparación del daño moral (Llambías, J.J., “Tratado de Derecho Civil - Obligaciones” T. I, pág. 353; Cazeaux - Trigo Represas, “Derecho de las Obligaciones”, 2da. ed.T.I, pág. 382; Cichero, “La reparación del daño moral en la reforma de 1968”, ED. 66-157; Borda, “Tratado de Derecho Civil - Obligaciones”, T.I, pág. 195, nro. 175, ed. 1979; CNCiv., Sala F, LL 1978-B-521; CNCiv, Sala F, ED 88:628; CNCiv Sala C, ED 60:226; CNCiv. Sala E, 19.9.94, “Vitolo D, c/ Guardado, Nestor”; CNCiv, Sala L, 13.6.91, “Mendez de Lopez Mansilla, Claribel y otra c/ Bonfiglio Wasbein y Bonfiglio SRL”; CNCom, Sala A, 13.7.84, “Collo Collada A. c/ Establecimientos Metalúrgicos Crespo SACI”)” (CN. Com. Sala D, in re “Chiozza Alberto Luis c/ Osplad. s/ Ordinario” del 15.09.2011).*

Pese a ello, la parte actora no le ha otorgado al daño moral un contenido específico, sino que lo ha tratado de forma residual, puesto que no ha alegado razonada y particularmente el supuesto daño, que se niega, menos lo ha probado ni lo ha ofrecido probar.

Es decir, trata al daño moral como un accesorio necesario de supuestos incumplimientos y actitudes, que, se reitera, se niegan. Sin embargo, esta postura es inaceptable ya que no solo niega la autonomía conceptual y fáctica del daño moral, sino que carece del más mínimo respaldo normativo.

Es que la actora no ha exhibido cómo se ha visto, supuestamente, afectada desde esta perspectiva. La falta de conexión y debida articulación del relato de la parte actora en este punto resulta evidente, puesto que además del necesario trasfondo argumental, falta el imprescindible respaldo probatorio.

Por tanto, la básica labor jurídica, es decir la subsunción de los hechos del caso en el derecho vigente se halla ausente, lo que constituye una constante durante la totalidad del escrito inaugural de la parte actora.

En el mismo sentido, no ha justificado de forma alguna el cálculo realizado para alcanzar la suma solicitada por este rubro.

En atención a lo expuesto, no cabe más que desestimar sin más la indemnización solicitada en concepto de daño moral.

3) Daño punitivo.

Se debe rechazar la pretensión de la parte actora consistente en que V.S. aplique una multa a esta parte con fundamento en el artículo 52 bis de la ley 24.240.

Véase que, para solicitar su aplicación, por \$2.500.000, ha sostenido que *“la firma demandada obró y continúa obrando con un objetivo incumplimiento de las exigencias de la ley 24.240, al fijar un valor superior de la unidad móvil, únicamente para los suscriptores de los planes de ahorro, a lo que se suma su gran negligencia a la hora de fijar la cuota mensual de los planes, cercana al dolo, al apropiarse de sumas injustamente percibidas de los suscriptores, generando así, un enriquecimiento sin causa MILLONARIO...”*

Lo cierto es que, la parte actora no brindó una explicación suficiente para la aplicación de un instituto con carácter de pena en su caso particular. La parte actora debería, al menos, haber detallado el hecho generador, la intencionalidad de esta parte, la gravedad del hecho y los medios de prueba que emplearía para acreditarlo. Sin embargo, nada hizo.

Recuérdese que la doctrina y la jurisprudencia son contestes en que la procedencia de la multa civil en concepto de daño punitivo no sólo depende de que el proveedor haya incumplido con sus obligaciones sino que, además, se exige que su accionar haya sido doloso o culposo. Es por esto que, el *daño punitivo* sólo será procedente en aquellos supuestos de extrema gravedad donde, habiendo incumplido alguna obligación legal o

contractual, el accionar del proveedor pueda ser calificado como **doloso o culposo -culpa grave-**, o bien éste haya obtenido algún enriquecimiento derivado del ilícito o, en ciertos casos, haya mediado abuso de posición de poder.

Sobre este punto, prestigiosa doctrina ha dicho que “...*por aplicación del principio de reserva (art. 18 CN), la consagración legislativa de los daños punitivos requeriría de una detallada descripción del hecho generador en cada caso, no bastando con una genérica y abierta cláusula general...*” y que “*El tipo previsto por el art. 52 bis es hasta tal punto “abierto” que resulta inconstitucional pues no respeta ninguno de los principios que dimanan del art. 18 de la CN: no describe con precisión la conducta prohibida, ni requiere un factor subjetivo de atribución, ni precisa pautas mínimas que habrán de guiar la graduación de la sanción*” (PICASSO, Sebastián, “Nuevas categorías de daños en la ley de defensa del consumidor”).

Se concluye que, en los términos planteados, el daño punitivo resulta improcedente.

OFREZCO PRUEBA

1) **Documental.** Se acompaña la siguiente documentación:

- Excel que da cuenta del aumento del valor móvil por debajo del índice del INDEC.
- Información pública de la parte actora obtenida de la página del Banco Central de la República Argentina.
- Resumen estado de cuenta.

2) **Informativa.** Solicito que se libre oficio a la **Inspección General de Justicia** (OFICIOSIGJ@JUS.GOV.AR) a fin de que dicha entidad informe si FCA cumplió con las presentaciones en relación al precio del vehículo del grupo “15796” de la parte actora. También se solicita que informe el precio del vehículo del grupo 15796 en los meses de septiembre de 2021, Noviembre de 2021, Mayo 2022, Septiembre 2022 y Noviembre 2022. Informe si la solicitud de adhesión cuenta con aprobación estatal.

3) **Pericia contable.** Solicito que, mediante exhorto a los Juzgados Nacionales en lo Comercial de la Ciudad de Buenos Aires, se designe un perito contador a fin de que, en la sede social, compulsando la documentación contable de esta sociedad, informe:

- a) Si la misma es llevada en legal forma.
- b) Indique el estado de cuenta de la parte actora en su grupo y orden y si la actora adeuda suma alguna a esta sociedad a la fecha de la demanda y al momento de la pericia.

- c) Determine si las cuotas en los planes de la parte actora se encuentran practicadas de acuerdo al valor de la unidad de ahorro.
- d) Indique quien fija el valor de la unidad de ahorro.
- e) Indique si adjudicó alguna unidad de la parte actora. Informe si la actora cumplió con los requisitos para la adjudicación y en su caso indique el motivo de la baja de la adjudicación.
- f) Informe si las cuotas pagadas por la parte actora en el marco del cumplimiento del contrato de ahorro previo fueron aplicadas e imputadas teniendo en cuenta el valor de la unidad de ahorro informada a la autoridad de aplicación.

4) **Reconocimiento judicial.** Se solicita se ordene el reconocimiento judicial del siguiente enlace <https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-5-31> y que de allí se descarguen los “Índices y variaciones porcentuales mensuales e interanuales según principales aperturas de la canasta. Diciembre de 2016-junio de 2024”.

LIMITACIÓN DE COSTAS.

Se solicita a V.S. que en el hipotético e improbable caso que haga lugar a la demanda la condena contemple la limitación de costas que impone el 730 CCyCN, que dispone: “*Si el incumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, deriva en litigio judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales, de todo tipo, allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no debe exceder del veinticinco por ciento del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades, superan dicho porcentaje, el juez debe proceder a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del porcentaje indicado, no se debe tener en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que han representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas*”.

CASO FEDERAL.

Para el hipotético y eventual caso en el que no se admita lo aquí solicitado, en atención a que ello implicaría infringir las disposiciones de los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional, se plantea la configuración de Caso Federal, reservándose esta peticionaria el derecho de recurrir a todos los tribunales superiores, incluyendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por los motivos expuestos se solicita que:

- 1- Se tenga por contestada la demanda en legal tiempo y forma.
- 2- Se tengan presente el desconocimiento de la documental de la parte actora.
- 3- Se tenga presente la documental acompañada y la prueba ofrecida.
- 4- Se tenga presente la reserva de caso federal.
- 5- Se rechace íntegramente la demanda. Con costas.

Proveer de conformidad.

JUSTICIA